



Bogotá, 19/12/2013

Al contestar, favor citar en el asunto, este
No. de Registro 20135500437461



20135500437461

Señor
Representante Legal y/o Apoderado(a)
TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A.
TRANSVERSAL 42A No. 5 - 20
BOGOTA - D.C.

ASUNTO: Notificación por Aviso

De manera atenta, me permito comunicarle que la Superintendencia de Puertos y Transporte, expidió la(s) resolución(es) No(s) **15502** de **10/12/2013** por la(s) cual(es) se **FALLA** una investigación administrativa a esa empresa.

De conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se remite para lo pertinente copia íntegra de la(s) resolución(es) en mención, precisando que las mismas quedarán debidamente notificadas al finalizar el día siguiente a la fecha de entrega del presente aviso en el lugar de destino.

Adicionalmente, me permito informarle que los recursos que legalmente proceden y las autoridades ante quienes deben interponerse los mismos, se relacionan a continuación:

Procede recurso de reposición ante el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

SI NO

Procede recurso de apelación ante el Superintendente de Puertos y Transporte dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

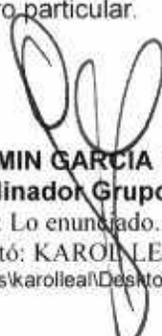
SI NO

Procede recurso de queja ante el Superintendente de Puertos y Transporte dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

SI NO

Si la(s) resolución(es) en mención corresponden a una(s) apertura de investigación, procede la presentación de descargos, para cuya radicación por escrito ante la Superintendencia de Puertos y Transporte cuenta con el plazo indicado en la parte resolutoria del acto administrativo que se anexa con el presente aviso.

Sin otro particular.


YATZMIN GARCIA MARTINEZ
Coordinador Grupo Notificaciones

Anexo: Lo enunciado.

Proyectó: KAROL LEAL

C:\Users\karolleal\Desktop\AVISOS 15424.odt

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

RESOLUCIÓN No. 10 DIC 2013 DEL 015502

Por la cual se falla la investigación administrativa iniciada mediante resolución No. 13146 del 15 de octubre de 2013 en contra de la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A, identificada con el Nit. 8001045000

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR (E)

En ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere el numeral 9 del artículo 44 del Decreto 101 de 2000; los numerales 9 y 13 del artículo 14 del Decreto 1016 de 2000; los artículos 3, 4 y 10 del Decreto 2741 de 2001, el artículo 9 del Decreto 173 de 2001.

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Decreto 101 de 2000, modificado por el artículo 3 del Decreto 2741 de 2001, se delega en la Superintendencia de Puertos y Transporte "Supertransporte", la función de inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación y el cumplimiento de las normas que rigen el sistema de tránsito y transporte.

Que acorde con lo preceptuado en el artículo 42 del Decreto 101 de 2000, modificado por el artículo 4 del Decreto 2741 de 2001, son sujetos de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte "Supertransporte", las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro, las empresas unipersonales y las personas naturales que presten el servicio público de transporte.

Que en virtud de lo previsto en el numeral 9 del artículo 14 del Decreto 1016 de 2000, modificado por el artículo 10 del Decreto 2741 de 2001, la Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor tiene entre otras, la función de asumir de oficio o a solicitud de cualquier autoridad o persona interesada, la investigación de las violaciones de las normas relativas al transporte terrestre de conformidad con la legislación vigente.

Que de conformidad con lo previsto en el Título I Capítulo IX de la Ley 336 de 1996 y artículo 51 del Decreto 3366 de 2003, establece: "Cuando se tenga conocimiento de una infracción a las normas de transporte, la Autoridad Competente abrirá investigación..."

HECHOS

Las Autoridades de Tránsito y Transporte en cumplimiento de sus funciones legales, elaboraron y trasladaron a esta entidad Informe Único de Infracción de Transporte No. 405199 de fecha 15 de enero de 2011, impuesto al vehículo identificado con la placa XIB-967, el cual transportaba carga para la empresa TRANSPORTE LARANDIA EXPRESS S.A, identificada con el Nit 8001045000, al parecer excediendo los límites de peso establecidos en la normatividad, conforme a los datos de pesaje registrados en el respectivo tiquete de báscula.

Por la cual se falla la investigación administrativa iniciada mediante resolución No. **13146 del 15 de octubre de 2013** en contra de la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga **TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A** identificada con **NIT. 8001045000**

Mediante Resolución **13146** de fecha 15 de Octubre de 2013 la Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor abrió investigación administrativa en contra de la empresa **TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A NIT 8001045000**, por transgredir presuntamente el literal d) del artículo 46 de la ley 336 de 1996; en concordancia con lo normado en el artículo 8 de la Resolución 4100 de 2004, modificado por el artículo 1 de la Resolución 1782 de 2009; y lo señalado en el artículo 1º código 560 de la Resolución No. 10800 de 2003.

- Dicho acto administrativo fue notificado personalmente el día 28 de octubre de 2013.
- En escrito de fecha 13 de noviembre de 2013, radicado bajo el N° 2013-560-065061-2, el representante legal de la empresa, por medio de su abogado presentó descargos de manera extemporánea. Por tal motivo no se tendrán en cuenta.

PRUEBAS REMITIDAS POR DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICIA NACIONAL

- Informe Único de Infracciones de Transporte No. 405199 de fecha 15 de enero de 2011
- Tiquete de Báscula No. 238240 de fecha 15 de enero de 2011

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE

La Empresa **TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A** identificada con **NIT. 8001045000** mediante autorización suscrita por la representante legal de la empresa se notificó personalmente el día 28 de Octubre de 2013 presentando los descargos el día 13 de Noviembre de 2013 dentro del término oportuno alegando lo siguiente:

1. ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA ENDILGADA – TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A., NO RECONOCE RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LAS PRESUNTAS INFRACCIONES DE TRANSPORTES, REFERIDAS EN LA INVESTIGACIÓN QUE SE ATACA.

A su defensa, la empresa alega que no debe reconocérsele responsabilidad alguna puesto que sólo se autorizó y permitió el cargue de peso permitido por la legislación correspondiente, y por lo tanto no es cierta la afirmación que **TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A.**, despachó el vehículo con peso superior al legalmente permitido. Además que la empresa no puede acarrear con las consecuencias negativas de los eventuales problemas de calibración de la báscula en la que se reportó el presunto sobrepeso. Además afirma que no incurrió en la infracción del IUIT No.405199 porque allí mismo se indica que el vehículo de placas XIB-967 tiene peso de salida de 52.000 kg.

2. FALSA MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No.13146 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2013, LO CUAL GENERA LA NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE IMPUGNA.

Argumenta la empresa que no se puede tomar de manera conveniente el informe de infracciones, por no respetar los intereses particulares y generales del sector y se debe tomar como prueba para demostrar mala calibración de la báscula.

Por la cual se falla la investigación administrativa iniciada mediante resolución No. 13146 del 15 de octubre de 2013 en contra de la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga **TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A** identificada con NIT. 8001045000

3. TACHA DE FALSEDAD IDEOLÓGICA SOBRE EL INFORME ÚNICO DE INFRACCIONES DE TRANSPORTE No.405199 OBJETO DE LA PRESENTE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.

TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A., no permitió ni facilitó sobrepeso alguno como consta en el IUIT No.405199 según consta en el manifiesto de carga expedido por la empresa aludida. Así pues tachan de falso ideológicamente el informe de infracción por tener manifestaciones contrarias a la realidad, incluso afirman que podría ser denunciado el hecho ante la Fiscalía por Falsedad Ideológica en Documento Público y Fraude Procesal en contra de la Policía de Tránsito que consignó esa falsedad en el comparendo.

4. SOLICITUD DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA, PARA ABSTENERSE DE SANCIONAR A TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A., LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES CUENTA CON EL MEDIO PARA DARLE VERACIDAD AL DOCUMENTO COMO SON LOS MANIFIESTOS DE CARGA QUE DESMUESTRA LA NO COMISIÓN DE UNA INFRACCIÓN DE TRANSPORTE.

El hecho que un policía de carreteras levante una infracción no significa que tal documento sea veraz y por lo tanto se debe demostrar que la empresa investigada no despachó el vehículo de placas XIB-967 con sobrepeso, y se deberán tener en cuenta los documentos que ampra la petición de los descargos formulados.

5. SOLICITUD DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE INOCENCIA: CON LAS PRUEBAS APORTADAS SE DEMUESTRA QUE TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A. NO DESPACHÓ CON SOBRESPESO ALGUNO EL VEHÍCULO DE PLACAS SOB-967.

La empresa trae a colación la Sentencia T-490 de 1992 Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, por la cual se alega la presunción de inocencia y advierte que puede ser desvirtuada mediante una mínima y suficiente actividad probatoria por parte de las autoridades represivas del estado.

6. METROLOGÍA: SOLICITUD DE APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO PREVISTO EN EL ART. 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Y A LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD, IGUALDAD, EQUIDAD, Y CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA.

Viola el debido proceso por la normatividad de la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre metrología, pues expresan que no hay certeza jurídica de que la báscula utilizada haya estado debidamente calibrada al momento de los hechos objeto de infracción.

Considera la empresa que deberá aplicarse la premisa de la DUDA en torno al reporte de sobrepeso sin encontrarse debidamente calibrada conforme a la regulación de la Superintendencia de Industria y Comercio.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

MARCO NORMATIVO

Ley 336 de 1996, Estatuto Nacional de Transporte; Decreto 173 de 2001 expedido por el Ministerio de Transporte, por medio del cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga; Resoluciones 4100 de 2004, 10800 de 2003 y 1782 de 2009

Por la cual se falla la investigación administrativa iniciada mediante resolución No. 13146 del 15 de octubre de 2013 en contra de la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga **TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A** identificada con **NIT. 8001045000** expedidas por el Ministerio de Transporte; Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Siendo competente este Despacho procede a pronunciarse de fondo respecto de la actuación administrativa adelantada con ocasión del Informe Único de Infracciones de Transporte No. 405199 de fecha 15 de enero de 2011.

Hechas las anteriores precisiones, se continuará con el estudio de fondo del asunto, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 336 de 1996 en concordancia con las normas contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, observándose que mediante resolución No. 13146 del 15 de octubre de 2013, se apertura investigación administrativa y se formularon cargos contra la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga **TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A. NIT.8001045000**, por incurrir presuntamente en la conducta descrita el literal d) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, modificado por el Art. 96 de la Ley 1450 de 2011, en concordancia con lo normado en el artículo 8, de la Resolución 4100 de 2004, modificado por el artículo 1º, de la Resolución 1782 de 2009; y lo señalado en el código de infracción 560, del artículo primero de la Resolución 10800 de 2003. Una vez puesta en conocimiento la formulación de cargos.

APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS

Para tal efecto, a continuación se hará un análisis jurídico del documento mismo y de su contenido, con el fin de establecer su merito y alcance probatorio, la validez de los datos consignados y la carga de la prueba, a efectos de desvirtuar los eventuales hechos que puedan desprenderse del mismo.

De acuerdo con la doctrina jurídica procesal, en materia de apreciación de las pruebas, es decir, de la actividad intelectual del juzgador para determinar su valor de convicción sobre la certeza, o ausencia de ésta, de las afirmaciones de las partes en el proceso, existen tres (3) sistemas, que son:

- a) El sistema de *intima convicción* o de *conciencia* o de *libre convicción*, en el cual se exige únicamente una certeza moral en el juzgador y no se requiere una motivación de su decisión, es decir, no se requiere la expresión de las razones de ésta. Es el sistema que se aplica en la institución de los llamados jurados de conciencia o jueces de hecho en los procesos penales en algunos ordenamientos jurídicos.
- b) El sistema de la *tarifa legal* o *prueba tasada*, en el cual la ley establece específicamente el valor de las pruebas y el juzgador simplemente aplica lo dispuesto en ella, en ejercicio de una función que puede considerarse mecánica, de suerte que aquel casi no necesita razonar para ese efecto porque el legislador ya lo ha hecho por él.

Este sistema requiere una motivación, que lógicamente consiste en la demostración de que el valor asignado por el juzgador a las pruebas guarda total conformidad con la voluntad del legislador.

- c) El sistema de la *sana crítica* o *persuasión racional*, en el cual el juzgador debe establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia.

Por la cual se falla la investigación administrativa iniciada mediante resolución No. 13146 del 15 de octubre de 2013 en contra de la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A identificada con NIT. 8001045000

Este sistema requiere igualmente una motivación, consistente en la expresión de las razones que el juzgador ha tenido para determinar el valor de las pruebas, con fundamento en las citadas reglas.

El último de los sistemas mencionados es el consagrado en los códigos modernos de procedimiento, en las varias ramas del Derecho, entre ellos el Código de Procedimiento Civil colombiano vigente, que dispone en su Art. 187:

"Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos".

"El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba".

En este orden de ideas, puede decirse que compete a este fallador el establecer con base en las reglas de la sana crítica el valor probatorio correspondiente a cada medio obrante en el plenario y, así determinar cuál de ellos lo lleva a la convicción respecto de la materialidad del hecho, o infracción en este caso, y la eventual responsabilidad de la investigada.

ADMISIBILIDAD DE LAS PRUEBAS

Teniendo en cuenta que el artículo 51 de la Ley 336 de 1996, remite en materia probatoria al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual dispone en el artículo 40 que serán admisibles los medios probatorios señalados en el Código de Procedimiento Civil, estatuto que en su artículo 178 preceptúa que las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y que se rechazarán *in limine* las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas.

Si concebimos la conducencia como la capacidad legal que tiene una prueba para demostrar cierto hecho, la encontramos en el examen que pueda realizar el operador jurídico entre la ley y el uso de ese medio probatorio sin ninguna dificultad legal que anule el valor probatorio que se procura. Así mismo la utilidad de la prueba se manifiesta en el servicio que preste para la convicción de un hecho que aún no se encuentra demostrado con otro medio probatorio. El maestro Hernando Devis Echandia define la prueba como *"el conjunto de motivos o razones, que de los medios aportados se deducen y que nos suministran el conocimiento de los hechos, para los fines del proceso".*¹

PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DEL INFORME UNICO DE INFRACCION DE TRANSPORTE

Es necesario advertir que el Informe Único de Infracciones de Transporte es un documento público², el cual es definido por los artículos 252 y 264 del Código de Procedimiento Civil como:

Artículo 252: *El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad.*

¹ Teoría General de la Prueba Judicial - Tomo I - Hernando Devis Echandia - Buenos Aires, Argentina - 1970.

² El Código de Procedimiento Civil, en su artículo 251 define el documento público de la siguiente forma: "Documento público es el otorgado por funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es otorgado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública."

Por la cual se falla la investigación administrativa iniciada mediante resolución No. 13146 del 15 de octubre de 2013 en contra de la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga **TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A** identificada con NIT. 8001045000

En ese orden, el artículo 264 de misma codificación señala:

Artículo 264: *Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza.*

En estos términos, la autenticidad del documento público es un aspecto de suprema importancia, puesto que el mérito probatorio de tal documento está en función de su autenticidad, por lo tanto, es claro que del mismo se desprenden unos hechos tales como: la empresa transportadora y el sobrepeso, principalmente, circunstancias en contra de la empresa investigada y que en conjunto con las demás pruebas obrantes en el expediente, invierten la carga de la prueba para la empresa, toda vez que es a ella a quien se le impone desvirtuar los mentados hechos.

Es por lo anterior, que este Despacho considera necesario hacer un estudio sobre la carga de la prueba, para lo cual citamos al tratadista Couture, para definir la carga procesal, como "una situación jurídica, instituida en la ley, consistente en el requerimiento de una conducta de realización facultativa normalmente establecida en interés del propio sujeto, y cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él"³.

La carga de la prueba es la que determina cual de los sujetos procesales deben "proponer, preparar y suministrar las pruebas en un proceso"⁴, en otras palabras, el principio de la carga de la prueba es el que determina quién debe probar los hechos. En razón de lo anterior, puede decirse que la carga de la prueba "Es el instituto procesal mediante el cual se establece una regla de juicio en cuya virtud se indica al Juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables de su desidia"⁵.

Es así como se concluye, que siendo la prueba la que permite exoneración o imponer la sanción por parte de esta delegada a la empresa **TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A. NIT.800104500**, no aportaron manifiesto de carga, sino que por el contrario adjuntan la REMESA No.54866 del 15 de Enero de 2011 expedida por la empresa investigada, y el documento de conocimiento de fecha 15 de Enero de 2011 expedida por Paz del Rio, documentos tales que NO SON PRUEBA VERAZ para desvirtuar la infracción por la cual se le acusa, y mucho menos tratar considerar que en el Informe Único de Infracción el agente de policía había estipulado que el manifiesto de carga tenía un peso de salida de 52.000 kg.

EL INFORME DE INFRACCIONES Y EL TIQUETE DE BÁSCULA

Respecto de esta prueba es preciso aducir, que en la resolución Resolución 10800 de 2003, por la cual se reglamenta el formato para el Informe de Infracciones de Transporte de que trata el artículo 54 del Decreto número 3366 del 21 de noviembre de 2003, estableció:

"(...) estableció que los agentes de control levantarán las infracciones a las normas de transporte en el formato (...) y, que este informe se tendrá como prueba para el inicio de la investigación administrativa correspondiente"

Así las cosas, el Informe Único de Infracciones del Transporte es un documento público que encuentra su régimen en el Código de Procedimiento Civil:

³ COUTURE, Eduardo. Fundamentos del derecho procesal civil. Buenos Aires Ediciones de la Palma, 1958.

⁴ OVALLE FAVELA, José. Derecho procesal civil. México D.F.: Editorial Melo 1991.

⁵ BACRÉ, Aldo. Teoría general del proceso, Tomo III. Buenos Aires: Abeled Perrot, 1992. 33

Por la cual se falla la investigación administrativa iniciada mediante resolución No. 13146 del 15 de octubre de 2013 en contra de la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga **TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A** identificada con NIT. 8001045000

CAPÍTULO VIII. DOCUMENTOS

"Artículo 251. DISTINTAS CLASES DE DOCUMENTO.

(...)

Documento público es el otorgado por funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es otorgado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública..."

(...)

Por otro lado, el documento público por su naturaleza, se presume auténtico y por lo tanto goza de total valor probatorio y no es susceptible de ratificación.

"Artículo 252. DOCUMENTO AUTÉNTICO.

(...)

El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad."

El aludido manifiesto fue establecido por el Decreto 173 de 2001 "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga", veamos:

CAPÍTULO III DOCUMENTOS DE TRANSPORTE DE CARGA

ARTÍCULO 27.- MANIFIESTO DE CARGA.- *La empresa de transporte habilitada, persona natural o jurídica, expedirá directamente el manifiesto de carga para todo transporte terrestre automotor de carga que se preste como servicio público. (Negritas fuera de texto)*

ARTÍCULO 28.- ADOPCIÓN DE FORMATO.- (...)

El manifiesto de carga se expedirá en original y tres (3) copias, firmados por la empresa de transporte habilitada y por el propietario o conductor del vehículo. El original deberá ser portado por el conductor durante todo el recorrido; la primera copia será conservada por la empresa de transporte, la segunda copia deberá ser enviada por la empresa a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- y la tercera copia deberá ser conservada por el propietario y/o conductor del vehículo. (Negritas fuera de texto)

Así mismo, la Resolución 2000 de 2004 (aplicable al caso) Por la cual se establece la Ficha Técnica para el formato único del MANIFIESTO DE CARGA, se señala el mecanismo para su elaboración, distribución y se establece el procedimiento de control, verificación y seguimiento; expedida por el Ministerio de Transporte, en su artículo 2, al respecto establece:

Por la cual se falla la investigación administrativa iniciada mediante resolución No. 13146 del 15 de octubre de 2013 en contra de la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A identificada con NIT. 8001045000

ARTÍCULO 2º.- CONCEPTOS BÁSICOS. El Manifiesto de Carga es un documento que ampara el transporte de mercancías ante las distintas autoridades y debe ser portado por el conductor del vehículo en todo el recorrido. (Negritas fuera de texto)

Este documento es expedido por las empresas de transporte de carga en el momento de efectuar la movilización de mercancías dentro del territorio nacional.

Así, queda establecido plenamente que la investigada tenía en su poder el manifiesto de carga y, sin embargo, nunca lo aportaron. Es claro además de las normas reproducidas, que la información consignada en los manifiestos de carga no se convalida o corrobora con las afirmaciones que al respecto hagan el gerente o representante legal de la empresa o el apoderado. En ese sentido, y como se desprende de manera cristalina de las normas anotadas, el Manifiesto de Carga es el documento que ampara el transporte de mercancías ante las distintas autoridades, y por tanto, es el documento idóneo y conducente para probar hechos concretos como el peso de las mercancías transportadas y el peso bruto del vehículo al momento de ser despacho desde el origen, etc.

Ahora bien, alegó la empresa en los descargos que para tomar la presente decisión se debe tener en cuenta la presunción de inocencia y advierte que puede ser desvirtuado mediante una mínima y suficiente actividad probatoria por parte de las autoridades del estado. Pues bien, frente a este argumento se encuentra por parte de esta delegada que el Informe Único de Infracción al haberlo elaborado un agente de policía goza de total autenticidad y veracidad por tratarse de un documento que está suscrito por un servidor público y bajo la gravedad de juramento.

Es por tanto, que el Informe Único de Infracción es un documento público por su naturaleza, se presume auténtico y por lo tanto goza de total valor probatorio y no es susceptible de ratificación. En este sentido si hay duda sobre la validez del mismo, el procedimiento pertinente será la Tacha de Falso del documento, como lo establece el artículo 252 C.P.C.:

"Artículo 252. DOCUMENTO AUTÉNTICO.

(...)

El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad."

Respecto al alegato de la violación a la garantía y principios del debido proceso, la publicidad, la igualdad, equidad y la contradicción, la apoderada de la empresa no tiene fundamento jurídico ya que los hechos y las pruebas aportadas son contundentes y lo suficientemente claras para que se demuestre la relación causal entre la conducta y la norma dando como resultado la responsabilidad de la empresa.

Adicionando que la superintendencia actuó de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 336 de 1996:

"Sin perjuicio de lo dispuesto por normas especiales sobre la materia, cuando se tenga conocimiento de la comisión de una infracción a las normas de transporte, la autoridad competente abrirá investigación en forma inmediata mediante resolución motivada contra la cual no cabrá recurso alguno, la cual deberá contener:

Por la cual se falla la investigación administrativa iniciada mediante resolución No. 13146 del 15 de octubre de 2013 en contra de la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga **TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A** identificada con NIT. 8001045000

- a) *Relación de las pruebas aportadas o allegadas que demuestren la existencia de los hechos;*
- b) *Los fundamentos jurídicos que sustenten la apertura y el desarrollo de la investigación, y*
- c) *Traslado por un término no inferior a diez (10) días ni superior a treinta (30) días, al presunto infractor para que por escrito responda a los cargos formulados y solicite las pruebas que considere pertinentes; las que se apreciarán de conformidad con a las reglas de la sana crítica."*

A la luz de la normatividad anteriormente mencionada, se ha dado cumplimiento al derecho al debido proceso, por cuanto, en la presente actuación se ha dado estricto cumplimiento a los principios que a continuación se enuncian:

Publicidad, ya que se ha publicado, comunicado y notificado todo el trámite administrativo en virtud de lo consagrado en el Título I Capítulo X del Código Contencioso Administrativo;

Contradicción, por cuanto se ha dado cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 336 de 1996 y se hizo traslado al supuesto infractor para que formule descargos y presente las pruebas que sustenten su posición. En ese sentido, la resolución por la cual se abre investigación administrativa contra la empresa enjuiciada, ha cumplido con los requisitos expresados en dicho artículo, ya que se ha hecho una relación de las prueba aportada, la apertura de la investigación ha sido sustentada jurídicamente y se ha dispuesto el traslado para que el investigado responda a los cargos formulados y aporte las pruebas que considere pertinentes para su defensa;

Legalidad de la Prueba, en virtud de los artículos 252 y 264 del Código de Procedimiento Civil por medio de los cuales se establece la legalidad y presunción de autenticidad de los documentos públicos como medios de prueba;

Juez Natural, teniendo en cuenta el numeral 9 del artículo 44 del Decreto 101 de 2000; los numerales 9 y 13 del artículo 14 del Decreto 1016 de 2000; los artículos 3, 4 y 10 del Decreto 2741 de 2001; el artículo 9 del Decreto 173 de 2001; y el artículo 50 de la Ley 336 de 1996, la Superintendencia de Puertos y Transporte es la entidad competente para juzgar a la investigada;

Doble Instancia, considerando que contra la presente Resolución procede el recurso de apelación ante el Superintendente de Puertos y Transporte;

En síntesis, la entidad si ha respetado todas las garantías procesales que están consagradas en la constitución artículo 29 y el código contencioso, por lo cual el acto administrativo está motivado de forma correcta.

ARTICULO 3o. PRINCIPIOS ORIENTADORES. *Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de **economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad** y **contradicción** y, en general, conforme a las normas de esta parte primera.*

En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa.

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios para

Por la cual se falla la investigación administrativa iniciada mediante resolución No. 13146 del 15 de octubre de 2013 en contra de la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga **TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A** identificada con NIT. 8001045000

actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a las autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y pruebas de los interesados.

El retardo injustificado es causal de sanción disciplinaria, que se puede imponer de oficio o por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al funcionario.

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo a petición del interesado.

MARGEN DE TOLERANCIA POSITIVO DE MEDICIÓN

La noción del margen de tolerancia y los objetivos que se buscó con su establecimiento, han sido ampliamente divulgados y conocidos por los actores de la cadena logística del transporte, y siempre hemos sostenido que el margen de tolerancia positiva no constituye un límite carente de finalidad; como tal, hace referencia a un margen permitido que atiende a la verificación de la verdad material respecto al cabal cumplimiento de los límites máximos autorizados para el transporte de carga. Constituye una garantía para los actores de la cadena de transportadores a efectos de que su actividad se vea amparada por condiciones materiales que permitan una operación sin contratiempos, sumada a la predicable oportunidad de las correspondientes autoridades administrativas de un control efectivo acerca del cumplimiento de las normas regulatorias del transporte de carga. Lejos de ser un concepto aislado en la fijación de los montos máximos permitidos, se trata de una garantía eficaz para la verificación del cumplimiento de las normas, dando lugar a investigaciones y sanciones administrativas coherentes con la realidad de una infracción, el límite positivo de tolerancia en últimas configura un criterio de justicia material.

La argumentación precedente, hace visibles las múltiples circunstancias que conspiran en el transporte de carga. Este conjunto de situaciones ambientales y circunstanciales no deben pasar desapercibidas por las autoridades administrativas de transporte, sino que deben ser cabalmente atendidas a efectos de lograr una actividad de control y vigilancia realmente efectiva.

Se tiene entonces, que la teleología del concepto de la tolerancia positiva no puede servir como un nuevo margen de carga sobre el peso bruto vehicular legalmente permitido; no debe derivarse la errónea conclusión de que la resolución 4100 de 2004 modificada por las resoluciones 2888 de 2005 y 1782 de 2009 impone un mero límite en el que ahora parecen consentirse pesos anteriormente no permitidos. Los actores de la cadena de transporte tienen la obligación de cumplir con las normas que imponen los límites de peso, no utilizando el margen de tolerancia positiva como un monto permisivo de cargas, per se, no autorizadas. La tolerancia positiva es en definitiva, un margen que se excluye del peso bruto total autorizado al momento de ser cargado el vehículo en el lugar de origen.

Esta Delegada, reitera su concepto en orden de manifestar que no es admisible jurídicamente utilizar el margen de tolerancia positiva como parte del margen de peso bruto vehicular legalmente permitido, puesto que una conducta en tal sentido constituye un actuar pasible de ser sancionado. Los límites fijados en la normatividad referida deben observarse desde el mismo momento de despacho de la carga.

La tolerancia, vistas las resoluciones 4100 de 2004, 2888 de 2005 y 1782 de 2009, debe entenderse como el número de kilogramos que puede exceder del peso bruto vehicular

Por la cual se falla la investigación administrativa iniciada mediante resolución No. 13146 del 15 de octubre de 2013 en contra de la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga **TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A** identificada con NIT. 8001045000

autorizado durante el pesaje del vehículo, a efectos de no descuidar las diferencias que pueden ser ocasionadas por la intervención de múltiples factores no instrumentales que de manera individual o conjunta pueden variar la medición del peso bruto vehicular. Claro y manifiesto es que dicho margen es permitido en la verificación y atiende a unas circunstancias que tienen lugar con posterioridad al despacho de la carga puesto que en tal oportunidad, ha debido verificarse el cumplimiento de los límites máximos fijados para el peso bruto vehicular autorizado.

Los vehículos, por consiguiente, no deberán ser cargados con cantidades superiores a los límites básicos autorizados. La tolerancia no es una permisión para la habitualidad ordinaria de carga transportada, en este sentido no es dable a los actores de la cadena transportadora inferir que se trata de un límite que se añade de forma pura y simple a un límite previamente establecido, pues se alude a límites claramente diferenciables: el límite del peso bruto vehicular permitido como autorización máxima ordinaria a la actividad transportadora de carga, a su turno, el límite de tolerancia positiva como excepcional frente a circunstancias contingentes que varían la medición del peso bruto vehicular y que ocurren durante el transporte de la carga y/o trayecto del recorrido. El peso bruto vehicular desde el inicio de la actividad transportadora ha debido corresponder al básico autorizado.

Esta Superintendencia recalca que es imperativo el cumplimiento de las normas de transporte y la observancia de las indicaciones anotadas, en este caso, referidas a las obligaciones de los actores de la cadena logística del transporte de carga – Generadores, Remitentes, Empresas de Transporte legalmente habilitadas, propietarios, poseedores o tenedores de equipos - en cuanto a la cabal y diligente observancia de los límites de pesos y dimensiones.

Así las cosas, la sanción a imponer se basa en los siguientes argumentos:

Informe Único de Infracciones No. 405199 se aprecia que el vehículo de placas XIB-967, transportaba carga con un sobrepeso de 10 Kg adicionales, dado que el peso bruto vehicular máximo para un camión (3S3) es de 52.000 Kg y una tolerancia positiva de medición de 1.300 Kg, conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Resolución 4100 de 2004, modificado por el artículo 1°, de la Resolución 1782 de 2009 y el vehículo citado al momento de pasar por la báscula pesó 53.310, esta información se logra evidenciar en el Tiquete de Báscula con Número de Registro 238240 del 15 de Enero de 2011, y vehículo registrado con placas XIB-967,

CAPÍTULO NOVENO

Sanciones y procedimientos

“Artículo 46. Con base en la graduación que se establece en el presente artículo, las multas oscilarán entre 1 y 2.000 salarios mínimos mensuales vigentes teniendo en cuenta las implicaciones de la infracción y procederán en los siguientes casos:

d) (...) <Literal modificado por el artículo 96 de la Ley 1450 de 2011. El nuevo texto es el siguiente: >En los casos de incremento o disminución de las tarifas de prestación de servicios no autorizados, o cuando se compruebe que el equipo excede los límites permitidos sobre dimensiones, peso o carga.

e) (...)

Por la cual se falla la investigación administrativa iniciada mediante resolución No. 13146 del 15 de octubre de 2013 en contra de la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga **TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A** identificada con NIT. 8001045000

Parágrafo. Para la aplicación de las multas a que se refiere el presente artículo se tendrán en cuenta los siguientes parámetros relacionados con cada Modo de transporte:

VEHICULOS	DESIGNACION kg	MAXIMO kg	PBV, TOLERANCIA POSITIVA DE MEDICION kg	CRITERIO PARA GRADUAR LA SANCION
Tracto-Camion con semiremoque	3S3	52.000	1.300	1 Salario Mínimo Legal Mensual Vigente por cada 20 Kg. de sobrepeso

La anterior escala de graduaciones, fue puesta en conocimiento al gremio por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte por su página web el 10 de octubre de 2011 mediante memorando No 20118100074403

"El Sobrepeso en el transporte de carga".

Bogotá, 10 de octubre de 2011. La Superintendencia de Puertos y Transporte, adoptó un nuevo modelo de gradualidad que será aplicado a empresas de transporte de carga que infrinjan la norma.

De acuerdo a ciertos criterios objetivos, como el tipo de vehículo, el sobrepeso detectado en el mismo, la afectación a la malla vial nacional y el margen de tolerancia, la Superintendencia de Puertos y Transporte estableció el modelo que determina el monto de la sanción."

Vemos en este punto que este despacho impondrá multas desde uno (1) a setecientos (700) salarios mínimos mensuales vigentes, dependiendo de la tipología del vehículo sumado al peso permitido y al criterio de graduación de la sanción. Es importante manifestar que no es discrecionalidad de la Superintendencia colocar un (1) salario o setecientos (700), esto está determinado por la gradualidad de la sanción que depende de los factores antes mencionados.

Como vemos, la conducta está tipificada como contravención en la Ley 336 de 1996, la cual también, estatuye la correspondiente sanción por el hecho del sobrepeso.

Un segundo momento que debe distinguirse, es la consagración de las correspondientes sanciones a las conductas que previamente se han establecido como contravenciones, las cuales igualmente, están establecidas, para el caso en concreto, en el literal d) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996. En este orden de ideas, el Decreto 3366 de 2003, es un desarrollo reglamentario que fijó unos marcos de sanción respecto a las conductas aludidas en la Ley 336 de 1996 (para el caso concreto el sobrepeso), sin tener en cuenta que la misma Ley tenía expresamente consagrada la sanción a imponer en los eventos de la conducta aquí investigada.

Del análisis anterior, se concluye que no es cierto el argumento esgrimido por la apoderada, pues al analizar el contenido de la ley, claramente se desprende de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 336 de 1996, que al incurrir en la conducta de "incremento o disminución de las tarifas o de prestación de servicios no autorizados, o cuando se compruebe que **el equipo excede los límites permitidos sobre dimensiones, peso o carga**, eventos en los cuales la

Por la cual se falla la investigación administrativa iniciada mediante resolución No. 13146 del 15 de octubre de 2013 en contra de la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga **TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A** identificada con **NIT. 8001045000**

sanción a imponer será de 1 a 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes, conforme al párrafo de la norma en cita, de modo tal que no hay lugar a hacer otro tipo de interpretación, bajo estos presupuestos, no está llamado a prosperar el argumento expuesto por la investigada, ni la presunta violación al principio de legalidad por ella exteriorizado, dado que la norma contiene todos los elementos propios de las normas sancionatorias.

De otra parte, al mismo tiempo debe quedar claro, que la Resolución 10800 de 2003 es un desarrollo reglamentario del artículo 54 del Decreto 3366 de 2003 (el cual se encuentra afectado de suspensión) y como tal tiene entera vigencia.

Así las cosas, y haciendo un detenido análisis sobre las normas que regulan el sector transporte en Colombia, encontramos que el transporte es un servicio público esencial⁶ y, por tanto goza de especial protección⁷. En ese orden de ideas, los intereses que se persiguen son, en primer lugar, la seguridad consagrada en los arts. 2 y 3 de las Leyes 105/93 y 336/96, y arts. 1 y 4 del Decreto 173/01, y en segundo término, (por conexión directa con el primero) la salvaguarda de derechos tan trascendentales como la misma vida de las personas (consagrado desde el preámbulo de la Constitución y en los arts. 2, 11 y 44, vinculadas al sector o usuarias del él, y que a menudo se pone en inminente peligro o resulta definitivamente afectado por el deterioro constante de la infraestructura, maña o red vial nacional como consecuencia de la misma irresponsabilidad del gremio, manifestada en las infracciones de sobrepeso, desdeñando de contera el elemento motivador de la función pública en el sector del transporte.

De todo lo expuesto, los cargos imputados por la vulneración a las normas de servicio público de transporte terrestre automotor de carga, en la medida que el hecho investigado encuentra pleno sustento en los documentales obrantes en el plenario, el tiquete de báscula No. 238240 el cual es anexo del Informe Único de Infracciones No. 405199 se aprecia que el vehículo de placas XIB-967, transportaba carga con un sobrepeso de 10 Kg adicionales, dado que el peso bruto vehicular máximo para un camión (3S3) es de 52.000 Kg y una tolerancia positiva de medición de 1.300 Kg, conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Resolución 4100 de 2004, modificado por el artículo 1º, de la Resolución 1782 de 2009 y el vehículo citado al momento de pasar por la báscula peso 53.310

Por todo lo expuesto, esta Delegada declara responsable y en consecuencia sancionará a la empresa **TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A. NIT. 8001045000**, con la prevista en la citada norma por vulnerar la norma de transporte mencionada.

En mérito de lo expuesto, esta Delegada,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR responsable a la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga **TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A. NIT 8001045000**, por contravenir el literal d del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, modificado por el Art. 96 de la Ley 1450 de 2011 en concordancia con lo normado en el artículo 8º de la Resolución 4100 de 2004 del Ministerio de Transporte, modificada por el artículo 1º de la Resolución 1782 de 2009 del Ministerio de Transporte, por incurrir en la conducta descrita en el artículo 1º, código 560 de la Resolución 10800 de 2003, proferida por el Ministerio de Transporte, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

⁶ Art. 5 de la Ley 336 de 1996.

⁷ Art. 4 de la Ley 336 de 1996.

Por la cual se falla la investigación administrativa iniciada mediante resolución No. **13146 del 15 de octubre de 2013** en contra de la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga **TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A** identificada con **NIT. 8001045000**

ARTÍCULO SEGUNDO: SANCIONAR con multa de **CERO PUNTO CINCO (0,5)** Salarios mínimos mensuales legales vigentes para la época de la comisión de los hechos, equivalentes a la suma de **DOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$267.800)**, a la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga **TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A. Nit. 8001045000**, conforme a lo señalado en la parte motiva.

PARÁGRAFO PRIMERO: La multa impuesta en la presente Resolución, deberá ser pagada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de la ejecutoria de la presente decisión a nombre de la cuenta **TASA DE VIGILANCIA SUPERPUERTOS Y TRANSPORTE Banco Popular Código Rentístico 02 Cuenta 050-00125-4**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Efectuado el pago de la multa, la empresa **TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A. Nit. 8001045000**, deberá allegar a esta Delegada vía fax, correo certificado o a través de cualquier otro medio idóneo; copia legible del recibo de consignación indicando expresamente el número de resolución de fallo y el Informe Único de Infracciones de Transporte No. 405199 de fecha **15 de enero de 2011**, que originó la sanción.

PARÁGRAFO TERCERO: Vencido el plazo de acreditación del pago sin que éste se haya demostrado, se procederá a su cobro persuasivo y/o coactivo por parte del Grupo Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva de la Superintendencia de Puertos y Transporte, teniendo en cuenta que la presente Resolución presta mérito ejecutivo de acuerdo a lo consagrado en el artículo 99 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución por conducto de la Secretaria General de la Superintendencia de Puertos y Transporte al Representante Legal y/o quien haga sus veces de la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de carga **TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A. Nit. 8001045000** con domicilio en la ciudad de **BOGOTÁ D.C. TV 42 A No 5-20, Teléfono: 4175112, correo electrónico No Registra** o en su defecto por aviso de conformidad con los artículos 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Copia de la comunicación a que se refiere el precitado artículo y la constancia de envío y recibo de la misma, deberá ser remitida a la Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor para que forme parte del respectivo expediente, así como también del acto de notificación personal o por edicto, según el caso.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y en subsidio de apelación ante la Superintendente Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, de los cuales podrá hacer uso por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la desfijación del aviso, según el caso.

Dada en Bogotá D.C., a los 10 DIC 2013 015502

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



FERNANDO MARTINEZ BRAVO

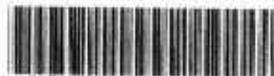
Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor (E)

Revisó: SUPERTRANSPORTE - Juan Rico
Proyecto: Convenio Universidad del Tolima
Natalia Cristina Vargas Saavedra, C.F.



Bogotá, 10/12/2013

Al contestar, favor citar en el asunto este
No. de Registro 20135500427881



20135500427881

Señor
Representante Legal y/o Apoderado (a)
TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A.
TRANSVERSAL 42A No. 5 - 20
BOGOTA - D.C.

ASUNTO: CITACION NOTIFICACION

Respetado(a) señor(a):

De manera atenta, me permito comunicarle que la Superintendencia de Puertos y Transporte, expidió la(s) resolución(es) No(s) **15502 de 10/12/2013**, por la(s) cual(es) se **FALLA** una investigación administrativa a esa empresa.

En consecuencia debe acercarse a la Secretaria General de esta Entidad, ubicada en la Calle 63 No. 9A-45 de la ciudad de Bogotá, con el objeto que se surta la correspondiente notificación personal; de no ser posible, ésta se surtirá por aviso de conformidad con el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En los eventos en que se otorgue autorización para surtir la notificación personal, se debe especificar los números de las resoluciones respecto de las cuales autoriza la notificación, para tal efecto en la página web de la entidad www.supertransporte.gov.co, link "**Resoluciones y edictos investigaciones administrativas**" se encuentra disponible un modelo de autorización, el cual podrá ser tomado como referencia. Así mismo se deberá presentar copia del decreto de nombramiento y acta de posesión, si es del caso.

En el caso que desee hacer uso de la opción de realizar el trámite de notificación electrónica para futuras ocasiones, usted señor(a) representante legal deberá diligenciar en su totalidad la autorización que se encuentra en el archivo Word anexo a la Circular 16 del 18 de junio de 2012 la cual se encuentra en la página web de la Entidad www.supertransporte.gov.co en el link "**Circulares Supertransporte**" y remitirlo a la calle 63 No. 9A-45 de la ciudad de Bogotá.

Sin otro particular.


YATZMIN GARCIA MARTINEZ
Asesora Despacho - Grupo Notificaciones

Transcribió: FELIPE PARDO PARDO
D:\Felipe pardo\Desktop\CITAT 15424.odt



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Representante Legal y/o Apoderado
**TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS
S.A.**
TRANSVERSAL 42A No. 5 - 20
BOGOTA - D.C.

Superintendencia Social
SUPERINTENDENCIA DE
PUERTOS Y TRANSPORTES

Dirección:
CALLE 63 9A 45

Ciudad:
BOGOTÁ D.C.

Departamento:
BOGOTÁ D.C.

ENVIO:
RN112867625CO

DESTINATARIO

Nombre/ Razón Social

TRANSPORTES LARANDIA

Dirección:
TRANSVERSAL 42A No. 5 - 1

Ciudad:
BOGOTÁ D.C.

Departamento:
BOGOTÁ D.C.

Preadmisión:
20/12/2013 15:36:28

472 SOLUCIÓN
DESTINATARIO
JSA

Sticker de Devolución

472 Motivos de Devolución	OTR/CIE	Apertado Clausurado
		Cerrado
Operación		No Existe Número
Dirección Errada		Faltante
No Reclamado		No Contactado
Reusado		Fuerza Mayor
No Recibe		

Intervento de entrega No. 1

Fecha: 20/12/2013

Edwin Soler
Nombre legible del distribuidor

OTR/CIE

Sector

Centro de Distribución

Observaciones

SECTOR 594 REGIONAL

CL 9F - P d SA

N. CO-01-003-PR-001 / Versión 2

F-8385

Oficina Principal - Calle 63 No. 96 - 45 Bogotá D.C

Centro de Conciliación Superintendencia de Puertos y Transporte - Calle 37 No. 28 B - 21 - Bogotá D.C

PBX: 3526700 - Bogotá D.C. Línea Atención al Ciudadano 01 8000 915615

www.superintendenciaportos.gov.co